

C.A. de Valdivia

Valdivia, tres de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Juan Javier Jara Müller, abogado, en representación y en favor de don Jorge Octavio Temer San Martín, condenado en causa ROL 57.067 del Juzgado de Letras de Victoria, quien recurre de amparo en contra la Primera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por la Ministra señora María Georgina Gutiérrez Aravena, Ministra Suplente señora Cecilia Subiabre Tapia y el Abogado Integrante señor Fernando Rene Cartes Sepúlveda, impugnando la resolución dictada el día 19 de noviembre de 2024 en causa ROL 345-2024, que rechazó la solicitud de decretar la suspensión del procedimiento solicitada por la defensa.

Sostiene que se ingresó solicitud fundada de sobreseimiento definitivo a causa de enajenación mental de don Jorge Temer San Martín, siendo remitidos los antecedentes al señor Ministro Instructor de primera instancia, quien con fecha 29 de noviembre de 2024, rechazó dicha solicitud y ordenó *“oficiar a la Directora Nacional del Servicio Médico Legal, a objeto de que realice las diligencias necesarias para el que Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak o la institución médica de su dependencia que corresponda, realice un Informe de facultades mentales completo y detallado al condenado antes referido, en el sentido de expresar: a) Si concretamente el condenado debe o no ser considerado un enajenado mental. b) En el caso de concurrir dicho diagnóstico si la enfermedad es o no curable. c) Si su libertad representa un peligro en el sentido que como consecuencia de su enfermedad pueda atentar contra sí mismo o contra otras personas, y la circunstancia de ser necesario que sea puesto a disposición de la autoridad sanitaria. d) Y, en especial a las modalidades del tratamiento a que deba ser sometido dicho acusado, a objeto de contar con un diagnóstico certero sobre la base de exámenes médicos de facultades mentales, que den cumplimiento a lo dispuesto a los artículos 684, 686 y 689 del Código de Procedimiento penal. Facultándosele para que, en caso de ser necesario, se realicen las respectivas entrevistas y/o evaluaciones respectivas a través de medios tecnológicos y para requerir, los antecedentes clínicos y/o hospitalarios del acusado antes individualizado a los establecimientos de salud donde pueda haber sido atendidos en el pasado. Remítase vía correo electrónico. Hecho, agréguese copia simple de las comunicaciones al proceso”*.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GHTWXRRGXFL

Indica que la resolución antes mencionada fue recurrida en su oportunidad dando origen a los autos tramitados bajo el ROL N° 1994-2024, decretándose la vista conjunta con recurso de apelación ROL 345-2024, donde se solicitó la suspensión del procedimiento mientras no se evacue el informe requerido al Servicio Médico Legal, siendo esta solicitud rechazada, lo que amenaza la libertad de su representado y su seguridad individual, pues la continuación del procedimiento sin la previa determinación de la capacidad mental del encausado y sin atender a los antecedentes hechos valer, desarrollando un proceso penal sin las garantías necesarias para su adecuada defensa, pues es él quien debe comprender cabalmente los actos del proceso que se sigue en su contra.

Agrega que su representado está sometido a la medida cautelar de arresto total y que es una persona que, además, padece de un cuadro de enajenación mental y sufre otras patologías crónicas, por ende, no está en condiciones psíquicas, ni físicas, para afrontar este proceso.

Solicita en definitiva acoger esta acción de amparo, adoptando las medidas necesarias para la restauración del imperio del derecho, entre ellas ordenar a los recurridos dejar sin efecto la resolución de fecha 19 de noviembre de 2024, para que, enmendándose conforme a derecho lo obrado, ordenándose la suspensión del procedimiento en la causa ROL N° 345-2024 hasta que se evacúe el informe pericial del Servicio Médico Legal decretado por el juez instructor, garantizando así el respeto de las garantías procesales y constitucionales del encausado, Jorge Temer San Martín.

Segundo: Que, informando los recurridos, exponen que con fecha 11 de marzo de 2024, se ingresaron ante esta Corte de Apelaciones los recursos de apelación y casación interpuestos contra la sentencia dictada el 12 de enero del mismo año por el señor Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre, designado para las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique.

Narran que los mencionados recursos, registrados bajo el ROL Penal 345-2024, se interponen en contra de la sentencia que condenó, entre otros acusados, a Jorge Octavio Temer San Martín a la pena de 19 años de presidio mayor en su grado máximo, además de las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena. La condena se dictó por los delitos de homicidio calificado de Eliseo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza, perpetrados el 27 de octubre de 1973 en la comuna de Victoria, considerados crímenes de lesa humanidad.



Indican que en la causa antes indicada, el abogado defensor, el 4 de octubre de 2024, presentó una solicitud incidental en favor de Jorge Octavio Temer San Martín, solicitando el sobreseimiento definitivo por enajenación mental y de forma subsidiaria, pidió la suspensión del procedimiento hasta que dicha solicitud fuera resuelta. Refieren que, en este contexto, los antecedentes fueron remitidos ante el Ministro en Visita Extraordinaria aludido para que resolviera sobre la solicitud de sobreseimiento definitivo, suspendiéndose entretanto el decreto de autos en relación.

Acotan que el 29 de octubre de 2024, el Ministro Instructor dictó una resolución rechazando la solicitud de sobreseimiento definitivo parcial del condenado Jorge Temer San Martín. Sin perjuicio de lo anterior, para tener mayor información médica del condenado, ofició a la Directora Nacional del Servicio Médico Legal a fin de que se efectúen las diligencias necesarias para que se realice un informe de facultades mentales del condenado, conforme a los artículos 684, 686 y 689 del Código de Procedimiento Penal. En contra de esta resolución, la defensa interpuso recurso de apelación, solicitando su revocación y, en subsidio, que se decretara la suspensión del procedimiento hasta la evacuación del informe del Servicio Médico Legal. Este recurso fue registrado bajo el ROL Penal 1994-2024 y, mediante resolución de 7 de noviembre de 2024, se ordenó su vista conjunta con los recursos de casación y apelación interpuestos contra la sentencia definitiva en la causa ROL Penal 345-2024.

Expresan que el día 11 de noviembre de 2024, la defensa presentó otra solicitud de suspensión del procedimiento, exclusivamente respecto de su representado, argumentando que su enajenación mental imposibilitaba su participación efectiva en el proceso. Esta solicitud fue igualmente rechazada mediante resolución de 19 de noviembre de 2024, el tribunal sostuvo que la suspensión del procedimiento no era procedente, ya que no existía, por el momento, un informe concluyente del Servicio Médico Legal que acreditara el estado de enajenación mental del imputado, requisito indispensable según el artículo 684 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, se considera que la resolución impugnada fue dictada en el ejercicio legítimo de las facultades jurisdiccionales que la ley otorga a los Tribunales de Alzada, dentro del ámbito de su competencia. Dicha resolución se adoptó con estricto apego a la normativa vigente y no presenta elementos de ilegalidad o arbitrariedad.

Agregan que la suspensión del procedimiento en esta etapa procesal contravendría los principios de celeridad y eficacia que rigen los procesos penales, establecidos en el artículo 19 N° 3 de la Constitución al no existir suficientes



elementos concluyentes, lo que por lo demás retrasaría injustificadamente el avance del procedimiento, afectando el adecuado desarrollo de la administración de justicia y vulnerando los derechos de otras partes intervinientes, como las víctimas y sus familiares, quienes también tienen derecho a una resolución pronta y eficaz de los conflictos judiciales.

Tercero. Que, por medio de la presente acción constitucional de amparo se denuncia la ilegalidad de una resolución judicial dictada por otra Corte de Apelaciones, en un proceso legalmente tramitado, tal como si fuera un recurso procesal u otro medio de impugnación previsto en el recorrido procesal correspondiente, esto es, el procedimiento legalmente previsto. Sólo podría estimarse procedente el amparo constitucional ante situaciones extraordinarias, en las que, hipotéticamente, un tribunal sobrepasara su competencia o desconociera flagrantemente los procedimientos legalmente disciplinados, de manera que actuara sólo bajo una apariencia jurisdiccional, obrando con desprecio del recto ejercicio de su función.

Por otra parte, pero en el mismo orden de ideas, por regla generalísima, esta Corte carece de competencia para conocer del presente asunto, toda vez que no tiene la calidad de órgano revisor de los fallos de una Corte de Apelaciones distinta, ni tampoco reviste el carácter de superior jerárquico a su respecto. Sin perjuicio de lo anterior, dada la fuente normativa y naturaleza del arbitrio en análisis, en casos calificados, de inobservancia de garantías orgánicas y formas procesales mínimas, cobra relevancia constitucional y se torna imperativa la revisión extraordinaria de las actuaciones del órgano jurisdiccional cuando afectan en algún grado relevante la libertad personal y seguridad individual.

Cuarto. Que, este Tribunal Superior ejerciera una suerte de bloqueo paritario de las resoluciones de otra Corte, exige una desviación manifiesta, intolerable para la defensa de la libertad personal que emprende el texto constitucional; circunstancia que no se configura cuando el órgano jurisdiccional recurrido busca premunirse de datos fiables y suficientes para resolver el sobreseimiento planteado, sin que su sola interposición o el hecho de premunirse ésta de antecedentes, conlleve efectos suspensivos o de interrupción de una pena privativa de libertad.

En efecto, según el mérito de la acción deducida, la cuestión reclamada dice relación con la negativa a la suspensión del procedimiento solicitado, que encierra la pretensión de libertad a favor del encartado, por no encontrarse acreditada su estado de enajenación mental por medio de informe pericial concluyente emanado del Servicio Médico Legal, conforme lo dispuesto en los



artículos 684 y 689 del Código de Procedimiento Penal, lo que discrepa el defensor y recurrente. Se trata de una decisión que guarda apego a derecho y al mérito del proceso en que se dictó.

Quinto. Con todo, conforme al mérito de los antecedentes puede advertirse que en este caso no se encuentra amenazada ni vulnerada en modo alguno la libertad personal ni la seguridad individual del amparado, de modo tal que no se configuran en la especie ni la gravedad ni la urgencia o la excepcionalidad, que, conforme lo razonado en el motivo tercero, autorizarían la intervención de esta Corte respecto de una resolución jurisdiccional de otra Corte del mismo nivel jerárquico. Los extremos descritos descartan que se haya incurrido en una arbitrariedad o ilegalidad que impidiera o dificultare al imputado ejercer los derechos que la ley le otorga, habida consideración que la decisión emanó de autoridad competente y en uso de sus facultades legales.

Sexto. En conclusión, aquello que la defensa alega como vulneración de la libertad individual no pasa de ser una diferencia de parecer jurídico respecto a la decisión adoptada por los recurridos, que -como tal- no constituye ilegalidad ni arbitrariedad por parte del tribunal, por lo que el recurso de amparo será rechazado.

Por estas consideraciones, y vistos, además, lo establecido en los artículos 19 N°7 y 21 de la Constitución Política de la República, se RECHAZA el recurso de amparo deducido en favor Jorge Octavio Temer San Martín.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Amparo-324-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GHTWXRRGXFL

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por Ministro Rodrigo Ignacio Schnettler C., Fiscal Judicial Gloria Edith Hidalgo A. y Abogado Integrante Ricardo Hernandez M. Valdivia, tres de diciembre de dos mil veinticuatro.

En Valdivia, a tres de diciembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GHTWXRRGXFL